



Ante la emergencia energética, hay que replantear la transición sobre unas bases democráticas y justas.

Nos encontramos en un momento crucial para la transición energética. La crisis climática nos obliga a reducir de manera drástica nuestra huella. Recientes acontecimientos geopolíticos también subrayan la importancia del abandono de las energías fósiles. Sabemos que hay que acelerar la transición energética, pero sin que el nuevo modelo energético reproduzca los errores del pasado.

Sin duda, necesitamos un nuevo sistema energético que se base en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, pero que al mismo tiempo sea distribuido, justo social y ambientalmente, y también democrático. Es hora de terminar con la opacidad de este sistema, de poner fin a la concentración de la energía en unas pocas manos, de evitar que las consecuencias del encarecimiento de la energía las paguen siempre las personas más vulnerables.

Sin embargo, las presiones desde las grandes compañías energéticas para mantener su *status quo*, unido a la aparición de nuevos agentes que buscan el mayor beneficio económico, empujan una vez más hacia un nuevo modelo energético fuertemente centralizado, con un gran impacto económico, social y ambiental.

Por ello, es urgente iniciar una transición energética ecológica, democrática y socialmente justa, que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Un cambio profundo en el mercado eléctrico, acabando con el mercado marginalista actual, para que el precio de la electricidad realmente refleje el coste de su generación.
- Teniendo en cuenta que el mercado no es eficiente ni justo a la hora de distribuir los recursos, sobre todo cuando hablamos de bienes esenciales, es necesario definir unos mínimos de consumos energéticos a bajo o ningún coste, y una fiscalidad realmente progresiva en las tarifas energéticas.
- Definir los trayectos profesionales y la recualificación necesaria para una transición justa, para que las personas que actualmente están empleadas en sectores en declive, encuentren empleo de calidad en los nuevos sectores que se van a ir generando.
- El despliegue de una política ambiciosa de ahorro y eficiencia energética, para reducir el consumo de energía de nuestra sociedad, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de implantar nuevos parques de generación de energías renovables, por el consumo de materiales y la ocupación del territorio que ello conllevaría. En este sentido, hay que ampliar los programas de ayudas al ahorro a todos los sectores económicos y sociales, en especial a quienes no tienen recursos para afrontar las inversiones necesarias para ello.



- Desarrollar estrategias innovadoras para la reducción de la demanda energética, como son la gestión de la demanda, el desarrollo reglamentario de los agregadores de demanda, y los sistemas distribuidos de almacenamiento de energía.
- Fijar unos topes de consumo de energía por sectores económicos y sociales, junto con una senda para su disminución, considerando por un lado la situación y capacidades de cada sector, pero priorizando aquellos sectores que más aportan desde el punto de vista social y ambiental.
- Una correcta planificación del territorio para la instalación de sistemas de energías renovables, de manera que se prime la defensa de los valores ambientales sobre el beneficio económico de las empresas privadas. Esta planificación se deberá basar en el análisis de las necesidades energéticas a nivel local, intentando asegurar el máximo de soberanía energética al menos a nivel comarcal, al tiempo que se reduce la necesidad de construcción de grandes infraestructuras dirigidas al comercio energético a gran escala.
- Fomento de las energías renovables térmicas, y de las tecnologías de bajo contenido tecnológico, que implican un menor consumo de materiales, ya que la climatización supone un porcentaje elevado del consumo de energía primaria.
- La creación de oficinas de información energética, para dar a conocer tanto las opciones de ahorro, eficiencia energética e implementación de energías renovables, como las ayudas que pueden existir en cada momento.
- El despliegue de una fiscalidad realmente verde y progresiva, que permita redistribuir correctamente la riqueza, bajo la perspectiva de “quien contamina, paga”, al tiempo que dirige los esfuerzos de la sociedad hacia una transición energética socialmente justa.